

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

Pesetas.

Un año dentro y fuera
de la capital 10
Un semestre id. id. 6
Un trimestre id. id. 4
Números sueltos 0'25
Se publica todos los días
excepto los domingos.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.)

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (q. D. g.), y Augusta Real Familia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

El Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio dice con fecha de ayer al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros lo siguiente:

«Excmo. Sr.: El Jefe de la Casa de S. A. R. la Infanta Doña María Luisa Fernanda, Duquesa viuda de Montpensier, me dice en telegrama fechado en Sevilla a las diez y veinticinco de la mañana de hoy lo que sigue:

«S. A. ha pasado la noche intranquila, con alguna disnea. Estado general muy débil. Temperatura, la de ayer, 38 con 7.»

Lo que de orden de S. M. transcribo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Palacio 5 de Febrero de 1893.—El Jefe Superior de Palacio, el Duque de Medina-Sidonia.—Sr. Presidente del Consejo de Ministros.»

Excmo. Sr.: El Jefe de la Casa de S. A. R. la Infanta Doña María Luisa Fernanda, Duquesa viuda de Montpensier, me dice en telegrama fechado en Sevilla a las ocho de la noche de hoy lo que sigue:

S. A. R. la Infanta Doña María Luisa Fernanda ha tenido durante el día de hoy menos fiebre, pero tiene una gran debilidad en el corazón.»

Lo que de ordene a S. M. comunico a V. S. para su inteligencia y efectos

consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Palacio 5 de Febrero de 1893.—El Jefe Superior de Palacio, el Duque de Medina-Sidonia.—Sr. Presidente del Consejo de Ministros.»

MINISTERIO DE HACIENDA

EXPOSICION

Señora: En el camino de economías emprendido por el Gobierno de V. M. para remediar la gravedad de la situación económica, se hallan a veces inconvenientes que han de salvarse cuidando de que guarden la debida proporción los trabajos propios de cada ramo y el número de empleados a quienes incombe realizarlos.

Hay que reducir las plantillas por ley de ineludible necesidad, pero a la par hay que simplificar los servicios administrativos por necesidad no menos evidente.

La actual complicación de éstos ha hecho creer a muchos que proviene del exceso mismo de funcionarios, y aunque esta opinión sea notoriamente infundada, importa al interés de la Administración tenerla en cuenta al realizar los laudables propósitos de la ley de procedimiento administrativo.

No dejó de mover, en parte, esa consideración el ánimo del Ministro que suscribe, cuando tuvo la honra de someter a la aprobación de V. M. el Real decreto de 29 de Diciembre último, suprimiendo la Dirección general de propiedades y Derechos del Estado, segregando de ella ciertos asuntos, y encomendando los restantes a una Sección con dotación de personal mucho mas reducida que la del Centro suprimido.

Ese personal tiene que atender preferentemente a la administración y venta de los bienes llamados nacionales, y es preciso evitar que la complicación de otros expedientes ocupe demasiado su atención y dilate la resolución de los asuntos con perjuicio de la Hacienda.

Hay en la actual Sección de Propiedades muchas peticiones de excepción de las leyes desamortizadoras presentadas fuera de plazos fatales e improrrogables que ya espiraron, y no existe razón alguna para que en tales expe-

dientes se pidan informes, ni se aporten datos, que huelgan desde el momento en que una resolución final, denegatoria de la solicitud, tiene que ser la ineludible consecuencia de no haberse ejercitado en tiempo el derecho de petición.

Hay también en la misma oficina pendientes de resolución, extraordinario número de incidencias de ventas suscitadas después del término en que es lícito hacerlo, las cuales, indebidamente, vienen a poner en tela de juicio la validez y eficacia del contrato celebrado con la Hacienda cuando ha pasado el tiempo necesario para que, según las leyes civiles y las administrativas, sea la venta válida, perfecta e irrevocable, no siendo raros los casos en los cuales, personas que no han contratado con la Hacienda, ni son causa habientes de los compradores, pretenden inmiscuirse en las cuestiones jurídicas que debieran discutirse sólo entre las partes que contrataron.

También penden en ese Centro numerosas reclamaciones de créditos contra el Estado por diversos conceptos, cuya tramitación y liquidación entorpece la marcha de la oficina, siendo claro que el interesado dejó transcurrir para hacer su reclamación los plazos fatales que señalan los artículos 18 y 19 de la ley de Contabilidad.

Todos esos asuntos, así como los menos numerosos, relativos a declaraciones del dominio útil y del derecho de redimir el directo, pretendidas por arrendatarios anteriores al año 1820, es preciso ultimarlos por trámite tan breve y sencillo como ha de ser el necesario para hacer constar en el expediente que el interesado dejó transcurrir los plazos dentro de los cuales debió utilizar su derecho.

Mas adelante convendrá tal vez consultar el parecer de las Cortes acerca de los medios prácticos, seguros y equitativos de recoger para el Estado algún provecho, de las considerables detenciones de bienes, por cuya enajenación se ha pagado inútilmente durante los treinta y seis últimos años de la desamortización.

Pero ahora, el Ministro que suscribe no pretende alterar en lo más mínimo el derecho vigente; antes bien, aspira, dentro del mismo, a que la atención que reclaman la Administración y venta de los Bienes nacionales, que han de aumentar los recursos del Tesoro,

no se distraiga con tramitaciones inútiles, mal avenidas con la rapidez que debe ser atributo característico de la Administración, y contrarias al artículo 2.º de la ley de 19 de Octubre de 1889, que señaló como vida normal a los expedientes en la vía gubernativa el plazo de un año.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 3 de Febrero de 1893.—Señora: A. L. R. P. de V. M., German Gamazo.

REAL DECRETO

En consideración a las razones expuestas por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los expedientes incoados después del 31 de Diciembre de 1872 en solicitud de excepción de los bienes de Capellanías y Patronatos familiares, serán resueltos sin mas tramitación que la necesaria para hacer constar que la solicitud de excepción fué presentada fuera de aquel plazo, declarado improrrogable por el Real decreto de 27 de Agosto del mismo año.

Art. 2.º Los interesados que ante los Tribunales ordinarios hubiesen obtenido u obtengan, con citación del representante en juicio de la Hacienda pública, sentencia de la adjudicación de los bienes, solicitarán del Juez competente que, con testimonio de la ejecutoria recaída, se eleve suplicatorio al Ministerio de Hacienda para que el cumplimiento se lleve a efecto administrativamente, como dispone el artículo 16 de la Ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870.

Art. 3.º Los expedientes de excepción que se refieran a bienes de aprovechamiento común o dehesas boyales, y en las cuales hayan transcurrido los plazos improrrogables de la ley de 8 de Mayo de 1888, serán resueltos sin mas trámites que los indispensables para hacer constar el transcurso de aquellos plazos, cualquiera que sea la personalidad y el derecho de los reclamantes.

Art. 4.º Las incidencias de las ventas hechas por el Estado antes del

1.º de Mayo de 1889, en que comenzó á regir el Código civil, y que hayan sido promovidas por los compradores ó sus causa habientes á título universal ó singular fuera del plazo de quince días, á contar de la posesión, señalado por el art. 7.º del Real decreto de 10 de Julio de 1865, serán desestimadas desde luego, sin más tramitación que la precisa para hacer constar esa circunstancia.

Queda á salvo la acción de los que, sin haber contratado con la Hacienda, se crean perjudicados en sus derechos civiles por alguna venta que ésta haya realizado. Al ejercicio de esa acción ante los Tribunales ordinarios, precederá la reclamación gubernativa en la forma dispuesta por el Real decreto de 23 de Marzo de 1886.

Art. 5.º También serán desestimadas desde luego, sin más tramitación que la indispensable para acreditar el transcurso del plazo legal, las incidencias de las ventas posteriores al 1.º de Mayo de 1889, que los compradores ó sus causa habientes á título universal ó singular hayan suscitado ó susciten después de los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. Se entenderá hecha la entrega en el acto del otorgamiento de la escritura, conforme al art. 1.462 del Código civil, y deberá tenerse por otorgada la escritura, aun cuando no lo hubiese sido por culpa del comprador; dentro de los tres meses que concede al efecto la orden del Regente del Reino de 20 de Abril de 1870, contados desde la notificación al mismo comprador de la adjudicación del remate.

Se hace á favor de los que no hayan contratado con la Hacienda la misma reserva expresada al final del anterior artículo.

Art. 6.º Los plazos de prescripción á que aluden los dos artículos anteriores no serán aplicables al saneamiento por evicción, el cual podrá exigirse de la Hacienda, según el artículo 1.480 del Código civil, cuando haya recaído sentencia firme en contra del comprador en pleito en el cual la representación del Estado haya sido citada con sujeción al art. 1.482 del mismo Código.

Art. 7.º Serán desestimadas sin tramitación todas las solicitudes de concesión de dominio útil y declaración del derecho de redimir el directo, formuladas por los causa habientes de los arrendatarios anteriores al año 1820 que hubiesen sido presentadas después de los seis meses que concedió al efecto el art. 3.º de la ley de 30 de Junio último.

Los términos que se concedan para justificar el derecho de los reclamantes en tiempo hábil, tendrán el carácter improrrogable que determina la regla 2.ª de la Real orden de 20 de Agosto de 1866.

Art. 8.º También serán desestimadas sin tramitación las reclamaciones de devolución de plazos y gastos de subasta, así como las de abono de mejoras y saldo á favor de compradores quebrados que se hayan presentado ó se presenten después de los cinco años siguientes á la notificación al interesado del acuerdo firme del cual se derive su derecho.

Lo mismo se hará cuando la solicitud se funde en daños ó perjuicios causados por el Estado al aplicar las leyes desamortizadoras, ó en motivos de equidad, si ha transcurrido más de un año desde el hecho de que se derive la reclamación.

Art. 9.º No se practicará liquidación alguna en los expedientes incoados ó que se incoen sobre las reclamaciones mencionadas en el artículo anterior sin que el Negocio respectivo de la Sección de Propiedades de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda

haga constar si la reclamación fué interpuesta ó no dentro de los plazos de cinco años y de un año que señalan los artículos 18 y 19 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870 y el 7.º de la de 31 de Diciembre de 1881.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos noventa y tres — Maria Cristina.—El Ministro de Hacienda, German Gamazo.

EXPOSICION

Señora: La carencia de una estadística que diera á conocer el número y circunstancias de las fincas urbanas y de los ganados, así como la extensión y calidad de los predios rústicos, ya parcelariamente, ya por masas de cultivos, dentro de cada término municipal, ha sido hasta hoy obstáculo insuperable para que la contribución territorial y pecuaria quede establecida con el carácter de impuesto de cuota fija, afectando á cada cual en justa proporción con los rendimientos de sus bienes.

Por este motivo, la ley de 23 de Mayo de 1845, hizo de dicha contribución un impuesto de repartimiento, facultando al Gobierno para que, bajo su responsabilidad y teniendo presentes las mejores bases de los anteriores repartos, distribuyese el cupo general entre las provincias, mientras que los Ayuntamientos y las Juntas provinciales debían distribuir el particular cupo de cada pueblo, con arreglo á las utilidades declaradas por los propietarios, colonos y ganaderos.

Temióse, no obstante, que las declaraciones no reflejasen con exactitud, ni tal vez con aproximación, la verdadera riqueza existente, y de ahí que se estableciera la responsabilidad colectiva de los contribuyentes, para que el recargo que unos sufrieran en sus cuotas, por el pago de las que otros dejaran de satisfacer, les moviera á denunciar las ocultaciones y la simulación de siniestros ó de insolvencia, con cuyo fin se dispuso también que los particulares y los pueblos pudieran entablar reclamaciones de agravio, y que las rebajas que obtuvieran por este concepto produjesen aumentos equivalentes en las cuotas ó cupos de los demás.

Hay que reconocer que este procedimiento era el único utilizable, dada la falta de medios con que la Administración había de hacer efectivo el impuesto; pero como el sistema no descansaba en principios científicos, ni en razones de equidad ó de justicia, era preciso abandonarle tan luego como se poseyeran los necesarios datos estadísticos, y para lograrlos se dictó el reglamento de 18 de Diciembre de 1846, disponiendo que en todos los pueblos se llevara á efecto la doble evaluación parcelaria y por masas de riqueza, formando los registros de las fincas y de los ganados y el catastro de cada término municipal.

La magnitud de la empresa y los cuantiosos gastos que había de ocasionar, calculados en más de 20 millones de reales, fueron parte, con otras varias causas, para que tan importantes trabajos no tuvieran realización, y en su defecto, se formaron en 1851 los documentos más sencillos, conocidos con el nombre de amillaramientos, que fueron rectificados en 1860, y que por medio de apéndices se modifican anualmente.

Pero no todos los Ayuntamientos prestaron su concurso á la Administración: antes bien, muchos de diferentes comarcas no llegaron á formar sus amillaramientos, alegando que lo imposibilitaba, ó hacía en extremo difícil, la excesiva subdivisión de la propiedad.

Por esta circunstancia, por las ocultaciones cometidas en las localidades donde los amillaramientos se formaron, y por las alteraciones que experimentan las fincas y los cultivos con el transcurso del tiempo, multitud de veces se trató de realizar la estadística territorial y pecuaria, sin que nunca llegaran á emprenderse los trabajos que requería, hasta que se publicó el reglamento de 10 de Diciembre de 1878, para cuya ejecución se adoptaron desde luego las medidas correspondientes.

Sin embargo, como después de tres años muchos contribuyentes no habían presentado aún las cédulas declaratorias, que debían ser el punto de partida de la rectificación, la ley de 31 de Diciembre de 1881, con el laudable propósito de acelerar la reforma, señaló en 16 por 100 el tipo de imposición, respecto á las provincias y pueblos en que se había cumplido aquel deber, disponiendo á la vez que se ajustase el repartimiento á la riqueza de las provincias por el resultado de las cédulas declaratorias, y que los pueblos que no las hubiesen presentado continuarán, hasta que lo verificasen, tributando á razón de 21 por 100 de la que tuvieran reconocida.

Útil fué también el empeño de la Administración para que los obligados á ello presentaran las cédulas declaratorias, y de aquí que, lejos de cumplirse totalmente los fines de la ley de 1881, quedó en suspenso la formación de los nuevos amillaramientos y se perpetuaron los dos tipos de imposición.

A restablecer la normalidad se dirigió la ley de 18 de Junio de 1885, que, refundiendo el impuesto de la sal en la contribución territorial y pecuaria, fijó esta en la suma de 180 millones de pesetas, para el año económico de 1885-86, al máximo gravamen de 17.50 por 100 en los distritos municipales que contribuían con el 16, y al 23 por 100 en los que continuaban tributando al 21; restableció el sistema de cupo fijo; declaró provisionales los dos tipos expresados, y ordenó que la Administración preparase el modo de unificarlos, por medio de la rectificación de la riqueza imponible de los distritos municipales y de la formación de nuevos amillaramientos, con cuyo fin se dictó un reglamento especial en 30 de Septiembre de aquel año, que tampoco fué cumplido, por que se derogaron disposiciones posteriores.

Discurriendo acerca de los motivos que pueden haber hecho estériles los constantes esfuerzos de la Administración para obtener la estadística de la riqueza, se adquiere el convencimiento de que la falta de resultados tiene su origen en dos causas principales, que son: de una parte, la resistencia que oponen aquellos á quienes conviene la continuación del presente estado de cosas, porque merced á él logran sustraer á la tributación grandes masas de riqueza, cuya ocultación realizan mediante el apoyo de las Corporaciones locales; y de otra parte, la duplicación de trabajos, así como el exceso de detalles exigidos por los reglamentos y el haberse olvidado, al redactar las instrucciones, aquel principio que exige que en toda investigación se proceda partiendo de lo fácil y conocido, para llegar gradual y sucesivamente á lo desconocido y más difícil.

La aplicación de este principio requería que, lejos de acometerse de una sola vez la empresa de formar la estadística de las riquezas rústica, urbana y pecuaria, se hubiese atendido por separado, y con la conveniente prelación, á cada uno de estos elementos, reuniendo primero los datos relativos á la propiedad urbana, por las facilida-

dades que ofrece su proximidad y peculiar manera de ser, después los de la ganadería que se pueden adquirir mediante sencillos recuentos, y en último término los de la riqueza rústica que es la más difícil de apreciar, por cuanto se halla subordinada á la extensión de las fincas, á la situación de las mismas, á su feracidad, al valor de los frutos, y en general á multitud de condiciones que se precisa tomar en cuenta para fijar la producción total, los gastos de cultivo y los rendimientos líquidos, ó sea la renta imponible.

La índole especial de la riqueza urbana se halla esencialmente reconocida desde que la ley de 7 de Julio de 1888 dispuso que tribute con un gravamen superior al fijado para la riqueza rústica y pecuaria; principio del cual no se ha deducido la lógica conveniencia, sin dada por ser, como es hoy, imposible la reducción ó aminoración de los gravámenes que pesan sobre la segunda, y faltar, como faltan á la Administración, los datos necesarios para llegar á sustituir al de repartimiento el sistema de cuota.

Preparando la realización de este ideal, y para que vengán á tributar desde luego aquellas fincas urbanas que, en todo ó en parte, han eludido el impuesto, el Gobierno se propone establecer el Registro fiscal de los edificios y solares, en el que serán inscritas todas y cada una de las fincas por el mismo orden de su situación en las calles, plazas y demás vías públicas, expresando el uso á que se destinan y su valor en renta y venta, hecho lo cual se dispondrá que los repartimientos se formen por el mismo orden que los Registros, figurando cada finca con la cuota que por separado corresponda.

Resulta de aquí que el Registro fiscal de los edificios y solares, considerará en primer término la entidad finca ó predio, relegando á segundo lugar la indicación de las personas que los posean. De esta manera se establecerá la apetecible armonía entre las disposiciones que regulan el impuesto directo sobre la propiedad inmueble y la ley civil; que le atribuye la naturaleza de carga Real; será fácil una reforma en el procedimiento ejecutivo que asegure la efectividad de las cuotas sin las dilaciones y quebrantos que ocasiona la confusión en el tributo de la riqueza rústica, urbana y pecuaria, y se evitarán muchas defraudaciones exigiendo que en los juicios y en los instrumentos públicos se haga constar siempre el valor con arreglo al cual tributan las casas y solares, con referencia al recibo del último trimestre.

Y no sirve objetar que semejante protección al impuesto puede llevar la perturbación al régimen de la propiedad, considerando á este independiente y desligado en absoluto del régimen económico, ya porque sucederá precisamente lo contrario, haciendo que entre ambos se establezca la necesaria armonía, sobre la misma base de la verdad, en la fijación de los valores, ya por que, lejos de ser incompatibles el fin económico y el fin jurídico, existe tan perfecta solidaridad entre ambos y otros fines del Estado, que ninguno puede sufrir menoscabo sin que los demás experimenten proporcionado daño.

La justicia, pues, y la conveniencia, exigen que el Registro fiscal de los edificios y solares se establezca sobre las indicadas bases, y á ellas será preciso ajustar igualmente el Registro de fincas rústicas, tan pronto como sea posible aspirar á su establecimiento, para lo cual están siendo objeto de preferente estudio los trabajos estadísticos, que, con notorio progreso realizan los Centros y dependencias

de diversos ramos de la Administracion.

Menos obstaculos ofrece la reforma de la contribucion directa, en lo que á la ganaderia se refiere, y por lo mismo, el Gobierno se propone realizarla en breve plazo.

Pero, sea cualquiera el tiempo que invierta la instalacion de los Registros fiscales, se impone la necesidad de emprender, desde luego, activa campaña para perseguir las defraudaciones, porque la justicia demanda que cese la ruinosa competencia de que son objeto los contribuyentes de buena fe, y porque, aun no aspirando el Estado, como no aspira, á elevar el cupo que actualmente reparte, tendrá en ello notoria conveniencia, puesto que á virtud de rebajas de gravamen, proporcionadas á los aumentos que obtenga en la base imponible, podrá realizar integramente la suma repartida.

Tan importante resultado hará seguir en este punto las previsiones del presupuesto, contribuyendo á la extincion del déficit, y de ahí que el Gobierno, que persigue este fin con primordial interés, haya solicitado de V. M. autorizacion para reorganizar la inspeccion y la investigacion de la Hacienda pública sobre sólidas bases de competencia y rectitud, que permitan esperar el descubrimiento de la riqueza oculta, reclamado imperiosamente por la opinion de todos.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 4 de Febrero de 1893.—señora: A L. R. P. de V. M., German Gamazo.

REAL DECRETO

En atencion á las razones expuestas por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Desde el día 1.º de Abril próximo el Gobierno hará uso de la facultad que le confiere el artículo 135 del reglamento de 30 de Septiembre de 1885 sobre la Contribucion territorial, estableciendo en las poblaciones, donde lo juzgue necesario, agentes especiales encargados de investigar las ocultaciones de los bienes inmuebles y de la ganaderia, ó bien del todo ó de parte de la produccion de los mismos. Estos funcionarios serán retribuidos con el importe de las dos terceras partes de las multas impuestas, siempre que por su iniciativa se haya descubierto la ocultacion.

Art. 2.º En cumplimiento del artículo 45 del citado reglamento, se exigirá á los defraudadores el pago de todas las cantidades que por la Contribucion territorial y pecuaria hayan dejado de satisfacer el 6 por 100 de intereses de demora, una multa equivalente á la cuarta parte de la renta imponible anual que hubieren ocultado y los gastos que ocasione la evaluacion, practicándola de oficio.

Art. 3.º Los denunciadores que ejerciten la accion pública para perseguir las ocultaciones de la riqueza imponible, así como los agentes especiales, tendrán derecho á percibir las dos terceras partes de las multas que se hagan efectivas, luego que éstas hayan ingresado en el Tesoro y sea firme la providencia que declaró la responsabilidad. Con la otra tercera parte se constituirá un fondo especial, destinado á sufragar los gastos de estadística y comprobacion de la riqueza. Los denunciadores garantizarán previamente depositando en el Tesoro la cantidad

necesaria, los gastos que, á juicio de la Administracion, sea indispensable hacer para comprobar las diferencias de riqueza declaradas de menos. Sin dicha garantia, se tendrá como no presentadas por aquellos las denuncias, y se tramitarán de oficio.

Cuando las denuncias se refieran á fincas ó ganados, que en absoluto estén sustraídos á la tributacion, no figurando en los amillaramientos, total ni parcialmente, serán admitidas y tramitadas desde luego, sin exigir al que las presente el depósito de garantia.

Art. 4.º Serán destinados igualmente al descubrimiento especial de las ocultaciones de la riqueza urbana, con derecho á la misma participacion en las multas, los funcionarios encargados de la inspeccion de Hacienda y los demas empleados que los Delegados de las provincias, á propuesta de los Administradores de Contribuciones, consideren necesarios para ultimar la comprobacion administrativa de dicha riqueza antes del día 1.º de Julio del corriente año.

Todos estos funcionarios darán cuenta á la Inspeccion central de las ocultaciones que descubran en la riqueza imponible, con arreglo al artículo 103 del reglamento de 31 de Agosto de 1892.

En las poblaciones á donde no sea posible destinar funcionarios de la Inspeccion ni agentes especiales para el descubrimiento de la riqueza oculta, la comprobacion administrativa de los edificios y solares será llevada á efecto por los Vocales de la Junta pericial, á cuyo fin la Delegacion de Hacienda de la provincia respectiva comunicará las órdenes é instrucciones convenientes.

Art. 5.º En las denuncias relativas á las fincas urbanas se procurará expresar el nombre del propietario, el pueblo, calle ó plaza y número del solar ó del edificio, su destino para habitacion ú otros usos, los pisos y cuartos que tiene, la renta que produce ó puede producir, si no estuviere arrendado, por analogía con otros de iguales ó semejantes condiciones, y la circunstancia de no estar amillrada la finca, ó de estarlo, por menor cantidad que la que debiera.

Para averiguar este último dato, los denunciadores particulares pueden solicitar en forma de las Administraciones provinciales de Contribuciones, de los Ayuntamientos y de las Comisiones de evaluacion, las certificaciones que necesiten con referencia á los amillaramientos, apéndices y repartos.

Los funcionarios de la Inspeccion de Hacienda y los agentes especiales á que se refiere el art. 1.º podrán consultar por sí mismos estos documentos y tomar noticias para formular sus denuncias, poniéndose de acuerdo con los Jefes de dichas oficinas ó con los Presidentes de las Corporaciones expresadas, segun los casos, para que no sufran demora los demas servicios.

Art. 6.º Acompañadas las denuncias, cuando sea preciso, de las cartas de pago que acrediten el depósito de garantia, serán presentadas al Delegado de Hacienda, el cual las decretará en el acto, disponiendo pasen al Administrador de Contribuciones, para que éste convoque la Junta administrativa que ha de resolverlas.

Constituirán esta Junta el Delegado, como Presidente, con voto de calidad, el Interventor de Hacienda, el Administrador de Contribuciones y el Abogado del Estado, ejerciendo de Secretario, sin voto, el que haga de Jefe del Negociado de la Contribucion territorial.

La convocatoria se hará con toda urgencia, fijando el día en que se ha de celebrar la Junta, sin exceder de

los cinco inmediatos al de la fecha de la presentacion, en cuyo plazo reunirá la Administracion de Contribuciones todos los antecedentes que puedan ilustrar el asunto ó servir de base para resolverle.

Las citaciones se ajustarán á lo dispuesto para el procedimiento administrativo en general.

En las Juntas serán oídos el denunciante y el denunciado, si asistiesen, para lo cual se les citará tambien, advirtiéndoles que en aquel acto se admitirán las pruebas que presenten.

El denunciado será requerido ademá, para que sin excusa exhiba al mismo tiempo el título de adquisicion de la finca ó fincas de que se trate, y los contratos de inquilinato, que está obligado á presentar, con arreglo al art. 97 del reglamento del Timbre, fecha 15 de Septiembre de 1892.

Hechas las alegaciones y examinadas las pruebas, se retiran los testigos y las demas personas que no sean Vocales de la Junta, la cual discutirá el asunto y resolverá por mayoría de votos, levantando y suscribiendo el acta correspondiente, en la que determinará la renta imponible de las fincas y todas las responsabilidades que proceda exigir.

Si la Junta creyese necesario comprobar algún hecho antes de dictar providencia, lo dispondrá así y citará para nueva sesion dentro de cuatro días, caso de que los medios de comprobacion existan en la capital, ó de ocho si hubiese que practicar alguna diligencia en otra localidad. Verificado esto, resolverá sobre el fondo de la denuncia.

(Concluirá)

ANUNCIOS OFICIALES

ADMINISTRACION

DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

RECAUDACIONES

Castro Caldelas y Montederramo.

Don Juan Gomez Ramos, Recaudador de contribuciones en los expresados distritos.

Hago saber: que la cobranza por territorial y subsidio correspondiente al tercer trimestre del corriente año económico, tendrá lugar en los sitios de costumbre, los días que á continuacion se expresan:

Castro Caldelas: los días 17, 18 y 19 del actual.

Montederramo: los días 20, 21 y 22 de idem.

Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 33 de la Instruccion de 12 de Mayo de 1888, hago público para conocimiento de los contribuyentes en dichos distritos municipales.

Orense Febrero 7 de 1893.—El Recaudador, Juan Gomez Ramos.

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del señor Gobernador inserta en el *Boletín* de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los Señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS

DE BENEFICENCIA DE ORENSE

AÑO ECONÓMICO DE 1892 93

Mes de Febrero

Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en la Hospital el día de la fecha, con ex-

presion del número de vacantes que existen en virtud de lo acordado por la Comision provincial en sesion de 15 de Marzo último.

Número de camas disponibles, segun el acuerdo. 74
Idem de enfermos de caridad hasta el día. 76

Exceso en camas supletorias. 2
Orense 7 de Febrero de 1893.—El Director, Narciso Serantes.

AYUNTAMIENTOS

VILLAMEA

Las cuentas de caudales de este Ayuntamiento correspondientes al año económico último de 1891 á 1892, se exponen al público por término de quince días á contar desde que el presente aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la provincia, á los fines prevenidos en el artículo 161 de la ley municipal.

Por igual plazo señalado y en la misma Secretaria del Ayuntamiento se hallan expuestos al público los presupuestos municipales, adicional y refundido para el corriente año de 1892 á 1893.

Villamea Febrero 3 de 1893.—El Alcalde, Francisco Salgado.

VILLAR DE SANTOS

Desde el día 10 al último del presente mes, tendrá lugar la terminacion del apéndice al amillaramiento que ha de servir de base al reparto territorial inmediato y aun cuando se halla continuamente abierto en la Secretaria un registro para anotar las alteraciones de la propiedad inmueble por expedientes posesorios ú otros en que interviene la administracion municipal, se invita á todos los propietarios vecinos y forasteros, á que dentro del plazo indicado entreguen en la Secretaria de Ayuntamiento las relaciones de las fincas que por compra venta, transmision gratuita ú otras causas hayan sido motivo de alteracion en la riqueza imponible con que figuran, cuyas relaciones escritas en papel del timbre de una peseta, vendrán acompañadas de los documentos que las justifiquen.

Villar de Santos Febrero 5 de 1893.—El Alcalde, Manuel Morales.

Rendida por el depositario de fondos municipales de este distrito la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio de 1891 92, se hallará de manifiesto en la Secretaria de Ayuntamiento por espacio de quince días á contar desde la insercion de este en el *Boletín oficial*, á fin de que pueda ser examinada por los vecinos que lo deseen.

Lo que se hace público para los fines prevenidos en la ley.

Villar de Santos Febrero 5 de 1893. El Alcalde, Manuel Morales.

CALVOS DE RANDIN

La cuenta municipal del ejercicio último de 1891 á 1892, rendida por el Depositario, así como el presupuesto adicional al definitivo del corriente ejercicio, quedan expuestos al público en la Secretaria del Ayuntamiento durante las horas de oficina, y á contar desde el siguiente que este aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la provincia.

Igualmente hago público no haberse producido reclamacion alguna contra la lista de electores á compromisarios á Senadores y padron de vecinos, por lo que se declaran firmes, segun acuerdo de la Corporacion de este día.

Calvos de Randin á 5 de Febrero de 1893.—El Alcalde, Francisco Vazquez.

TRIBUNALES

PRIMERA INSTANCIA

D. Angel Rancano Bermudez, Juez de instrucción y de primera instancia de la villa y partido de Ganzo de Limia.

Hago público: que para pago de costas impuestas a José Veloso Rodríguez, vecino del Rial de Sabucedo, término municipal de Porquera, por virtud de la causa que se le siguió sobre hurto, se saca a pública subasta que se celebrará en la audiencia de este Juzgado, el día 13 de Marzo entrante y hora de las once de su mañana, la siguiente finca como de la pertenencia de aquel.

1.ª Cuqueiro, centenar de cuatro áreas 23 centiáreas; linda Este Manuel Peaguda, Sur Manuela Martínez, Oeste Josefa Gándara y Norte Benito de Penin, cuyo apellido se ignora, carril de servidumbre en medio: valor 20 pesetas.

Radican en términos del pueblo del Rial de Sabucedo.

Los que quieran hacer postura a ella, concurrirá el día 13 de Marzo entrante y hora de once de su mañana a la referida sala de audiencia de este Juzgado que se rematarán al mas ventajoso postor, cuya subasta se anuncia sin sujeción a tipo, pues así se acordó por providencia dictada en esta fecha.

Dado en Ganzo de Limia a seis de Febrero de 1893.—Angel Rancano.—de orden de su s.ñoría.—Ramon Cadorniga.

Don Victor César Villariño, Juez accidental de primera instancia de la ciudad y partido de Orense.

Hago público: que en diligencias de ejecución de sentencia de pleito juicio declarativo de menor cuantía promovido en este Juzgado por el Procurador Lopez Castro a nombre de don José Lopez Añel, vecino de Ferreiros en el distrito de Coles, contra Manuel Mira Blanco de Albarellos sobre pago de mil cuatrocientas setenta y dos pesetas doce céntimos, y para hacer pago a Lopez Añel de la expresada cantidad y las costas, se embararon como de la propiedad del Mira justipreciaron y sacan a subasta con la rebaja del veinticinco por ciento del valor de su tasación los bienes siguientes:

Pesetas

1.ª Al nombramiento do Campo de Arriba, un terreno destinado a viña y parral, mide veintiseis áreas sesenta y siete centiáreas; linda Norte camino sendero que de Costela sube a Pousada, Sur Camino de carro que de Bamio de Cima va a Costela y Este viña y parral de los herederos de José Gonzalez y Ambrosio Rodríguez de Costela y al Oeste dicho camino carretero que de Pousada va a Costela: valor setecientas cincuenta pesetas

750

2.ª Al Campo de Abajo, quince áreas setenta y cinco centiáreas de naval con riego; linda Norte camino de carro que del Bamio va a Costela, al Este mas labradío de los herederos de José Gonzalez y Oeste los de Manuel Cao de Bamio de Fondo y mas de Manuel Varela, Manuel Agromayor y otros: valor de la duodécima parte de esta finca noventa y cuatro pesetas

94

3.ª Al do Penedo, treinta y seis áreas noventa y seis centiáreas de labradío con viña y monte; linda Norte viña de Manuel Varela de Costela, Sur camino de carro que de Bamio va a Costela, Este mas monte de los herederos de Ma-

nuel Vazquez de Tras do Rio y Oeste tojal de los herederos de José Gonzalez de Costela: su valor doscientas pesetas

200

4.ª Al da viña Grande, cinco áreas veinticinco centiáreas de labradío en frutales y algun monte; linda Norte mas de Cayetano Blanco, de Pousada, camino en medio, Sur camino que de Pousada sube a Costela, Este de Manuel Agromayor y camino público en medio: su valor cien pesetas

100

5.ª Al dos Chaos, cuarenta y una áreas setenta y nueve centiáreas de heredad y monte; linda Norte monte de Juan Rodríguez, de Pousada, Sur con terreno a soto y viña de Domingo Sanchez del mismo Pousada, y Manuel Pereira de Cima de Vila, Este camino que sube a San Eusebio y monte de Cayetano Blanco, y al Oeste con terreno a labradío y viña de Francisco Gomez, del referido Cima de Vila: su valor cien pesetas

100

6.ª Al das Pias, veintinueve áreas cuarenta centiáreas de monte cerrado sobre si; linda Norte mas de los herederos de José Gonzalez, Sur mas de Manuel Figueiras y Francisco Perez, de Cima de Vila, Este mas de Ramon Rodriguez y Antonio Moure, de la Jurada, y Oeste camino sendero que sube a la Iglesia y monte de Francisco Gomez: su valor cuarenta pesetas

40

7.ª Una casa de alto y bajo titulada cuarto nuevo, sita en Costela y señalada con el número ciento cuarenta y seis, unida a esta otras terrenas destinadas una a bodega con separación de piedra en medio, y otra a cuadro tambien en dos departamentos, las cuales contienen al aire Sur, Oeste con pequeño rosío en el que existe una hilera de cepas que forman parral y cubren el camino público, la casa de alto y bajo se halla pisada y fayada de madera de castaño y las terrenas a tejaban y todas cubiertas de teja unida, todo en junto una extensión superficial de trescientos sesenta y cinco metros cuadrados; y confina al Norte camino sendero que va al campo y viña de Antonio Gomez, de Cerdedo, Sur el citado campo público, Este mas casa de los herederos de José Gonzalez y Oeste con otro camino público, atendiendo pues a su estado y localidad: su valor ochocientas pesetas

800

8.ª Otra casa de alto y bajo, sita en dicho lugar de Costela señalada con el número ciento treinta y nueve, la cual se halla en varios departamentos en su planta alta compuesta de dos salas, una alcoba, corredor y solar de piedra, la planta baja se halla en cinco departamentos, tres cuartos, cocina y despensa con su correspondiente patio y corral y a su alrededor con terreno y rosío por los aires Este, Sur y Oeste de dicha casa con destino a labradío y parral conocido por la Huerta do Límoeiro que todo en junto como se halla unido y cerrado con pared de piedra, mide una extensión superficial de trescientos diez metros cuadrados; y confina al Este mas casa de Manuela Agromayor y calle pública, Norte mas casa de Manuel Varela y herederos de José Gon-

zalez, Sur camino público que de Melias conduce a San Eusebio y Oeste viña de los herederos de Antonio Perez, de Mirado Rio y los formales de una casa que fué de Ventura Gonzalez, atendiendo igualmente a su estado, localidad y demás circunstancias: su valor ochocientas pesetas

800

9.ª Al das Abelairas, otro terreno destinado a parral, limita con frutales, labradío, prado con mimbres, soto de castaños y monte robleda, mide una extensión superficial de setenta y una áreas ochenta centiáreas; linda Norte con la pieza que nombran da Palanqueta, que fué en parte de Ventura Gonzalez, labradío de Manuel Bispo y viña de Manuel Figueiras, Sur camino sendero que da servicio a don Manuel Rivadeneira, Este con mas viña de Domingo Rodriguez, Oeste caminosendero y la pieza nombrada da Moreira, dentro de estas demarcaciones quedan unas pequeñas porciones a parcelas de la propiedad de Manuel y herederos de Domingo Agromayor, Manuel Varela y Ambrosio Rodriguez las cuales no están comprendidas en esta superficie y se justiprecio la duodécima parte que le corresponde en la misma: en doscientas pesetas

200

10. Una cuba madera de castaño, con seis arcos tambien de madera en un estado regular, porte de unos catorce mojos: su valor cincuenta pesetas

50

11. Otra cuba de igual madera con seis arcos de madera y su porte de unos ocho mojos, las cuales se hallan en la propia bodega: su valor treinta pesetas

30

Cuyos bienes radican en términos de la parroquia indicada de San Eusebio.

Las personas que quieran hacer postura a los bienes relacionados pueden concurrir a esta sala de audiencia el día cuatro del próximo Marzo hora diez de la mañana en que tendrá efecto el remate a favor del mas ventajoso licitador, advirtiéndose que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del valor porque se sacan a subasta, que para optar al remate debe hacerse previamente el correspondiente depósito y que no existiendo títulos de propiedad de los inmuebles debe el rematante suplir su falta por los medios establecidos en la ley Hipotecaria.

Dado en Orense a siete de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.—Victor César Villariño.—El actuario, Francisco Cuevas.

MUNICIPALES

Rectificadas debidamente las listas de cabezas de familia y capacidades por la junta encargada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el art. 16 de la ley estableciendo el juicio por jurados, estarán de manifiesto al público en la Secretaría de este Juzgado, durante la primera quincena del próximo mes de Febrero cual lo previene el art. 18 de predicha ley. Lo que se hace público por medio del presente a fin de que los vecinos de este municipio puedan hacer las reclamaciones de inclusion y exclusion que creyeren convenientes.

Villamartin de Valdeorras Enero 30 de 1893.—El Juez municipal, Gustavo Prada Meruendano.—De su orden, Adel Yebra, Secretario.

Don Juan Cayetano Tejada Alvarez,

Juez municipal de Calvos de Randin, Hago público: que las listas de jurados rectificadas por la Junta según el artículo 16 de la ley del Jurado, quedan expuestas al público por término de quince días en la Secretaría de este Juzgado, a contar desde el día siguiente en que este aparezca inserto en el Boletín oficial de la provincia, para que dentro del plazo indicado puedan los vecinos producir sus reclamaciones. Calvos de Randin a 4 de Febrero de 1893.—El Juez, Juan C. Tejada.

ANUNCIOS

AVISO

La persona que quiera adquirir setenta y un ferrado y medio de ceneno de renta y doscientos cincuenta reales de censo en dinero cobrables en el pueblo y parroquia de Gustey, Ayuntamiento de Coles, cuatro mojos de vino tinto y ciento noventa y ocho reales de censo cobrables en la ciudad de Orense, se apersonará con don Bernardo Guerrero, vecino de San Miguel de Melias en dicha alcaldía de Coles y en esta capital en los días 7 y 8 de cada mes, en la calle de los Hornos número 4 sujeto encargado para hacer dicha venta. 2-30

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER

Orense.—Progreso, 36

MAQUINAS PARA COSER

Las seis grandes fábricas que tiene establecidas en América y Europa la Compañía Fabril SINGER y que ya once millones de máquinas revela bien a las claras la marcada predilección que el público de ambos continentes demuestra por las máquinas SINGER.

Entre los hermosísimos modelos que dieron justa fama a esta fabricación descuellan la nueva *Lanzadera vibrante*. Desprovista de engranes y de fácil manejo, es la más ligera, la que menos ruido hace, la de más sencillo mecanismo y con la que pueden ejecutarse primorosas labores.

A pesetas 2.50 por semana

Grandes descuentos al contado.

Comisionados para la venta y cobros en los principales pueblos de la provincia.

CARRETES DE HILO

Torsales de seda.—Agujas, aceite.

Piezas sueltas y accesorios para toda clase de costura.

Pídanse catálogos ilustrados que se dan gratis.

A LOS ENFERMOS

DE LOS OJOS



Llegó el renombrado especialista en las enfermedades de la vista Don M. Marban. Tiene su Clínica Oftalmológica en la calle de Hernán Cortés, número 7.

Horas de consulta, desde las diez de la mañana en adelante.

Coloca y vende ojos artificiales.

NOTA. En la primera visita serán desengañados los que no tengan remedio.—5.

VENTA

A voluntad de su dueño se vende la mitad de la casa señalada con el número 33, en la calle de Santo Domingo de esta ciudad, con su patio o resío: dará razón el Procurador Berjano.—77

Imprenta LA POPULAR